



# La salvaguarda del patrimonio inmaterial como acuerdo social

Propuesta metodológica para la  
elaboración de planes colaborativos  
de salvaguarda del PCI



**Junta de Andalucía**

Consejería de Cultura  
y Patrimonio Histórico

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

CONSEJERÍA DE CULTURA  
Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Consejera de Cultura y  
Patrimonio Histórico  
Patricia del Pozo Fernández

Viceconsejera de Cultura y  
Patrimonio Histórico  
María Esperanza O'Neill Orueta

Secretario General de  
Patrimonio Cultural  
Juan Cristóbal Jurado Vela

Director General de Patrimonio  
Histórico y Documental  
Miguel Ángel Araúz

Director del Instituto Andaluz del  
Patrimonio Histórico (IAPH)  
Juan José Primo Jurado

Edita: Consejería de Cultura y  
Patrimonio Histórico.  
Junta de Andalucía

Proyecto financiado por el Mi-  
nisterio de Cultura y Deporte,  
Gobierno de España, con cargo  
a las ayudas, en régimen de  
concurcencia competitiva, para  
proyectos de salvaguarda del  
Patrimonio Cultural Inmaterial  
correspondientes al año 2019

© de la edición:  
Consejería de Cultura y  
Patrimonio Histórico.  
Junta de Andalucía

Coordinación de la edición:  
Instituto Andaluz del Patrimonio  
Histórico

COORDINACIÓN CIENTÍFICA  
Gema Carrera Díaz, IAPH

AUTORÍA  
Rívia Ryker Bandeira de Alencar  
Gema Carrera Díaz  
Eva Cote Montes  
Cristina Cruces Roldán  
Aniceto Delgado Méndez  
Isabel Durán Salado  
David Florido del Corral  
Andrés Forero Rueda  
Carlos García Bayona  
Ana María García López  
Sara González Cambeiro  
Cristina Isla Palma  
Luis Pablo Martínez Sanmartín  
Mónica Ortiz Sánchez  
Teresa Pacheco Albino  
Fuensanta Plata García  
Victoria Quintero Morón  
Cristina Sánchez Carretero  
Ana Saraiva  
María Pía Timón Tiemblo

EQUIPO EDITORIAL IAPH  
María Cuéllar Gordillo, Cinta  
Delgado Soler, Carmen Guerrero  
Quintero

APOYO EDITORIAL  
Deculturas S. Coop. And.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN  
Manolo García nz



Esta obra está bajo una licencia  
Reconocimiento-NoComercial-  
SinObraDerivada 3.0 España  
Creative Commons.

Usted es libre de copiar, distribuir  
y comunicar públicamente  
la obra bajo las condiciones  
siguientes:

- Reconocimiento. Debe  
reconocer los  
créditos de la obra de la manera  
especificada por el autor o el  
licenciador.

- No comercial. No puede utilizar  
esta obra para fines comerciales.

- Sin obras derivadas. No se  
puede alterar, transformar o  
generar una obra derivada a  
partir de esta obra.

Al reutilizar o distribuir la obra,  
tiene que dejar bien claro los  
términos de la licencia de  
esta obra. Alguna de estas  
condiciones puede no aplicarse  
si se obtiene el permiso del  
titular de los derechos de autor.  
Los derechos derivados de usos  
legítimos u otras limitaciones  
reconocidas por ley no se ven  
afectados por lo anterior.

La licencia completa está  
disponible en:

[http://creativecommons.org/  
licenses/bync-nd/3.0/es/](http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/3.0/es/)

AÑO DE EDICIÓN: 2021  
ISBN: 978-84-9959-395-1

# **La salvaguarda del patrimonio inmaterial como acuerdo social**

Propuesta metodológica para la  
elaboración de planes colaborativos  
de salvaguarda del PCI

## Presentación

Casi desde sus inicios, ya en la década de los 90 del siglo XX, el Instituto Andalúz del Patrimonio Histórico, incorporó, en su Centro de Documentación y Estudios, la perspectiva antropológica en las labores técnicas e investigadoras sobre patrimonio, labor que se hizo especialmente fructífera a partir de la *Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial* de UNESCO (París, 2003).

Así, la elaboración del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía (2008-2014) constituyó para la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y para el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España una de las grandes aportaciones metodológicas realizadas por el Instituto Andalúz del Patrimonio Histórico en el ámbito del conocimiento y salvaguarda de este patrimonio, incorporándose su propuesta metodológica al Plan Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico en 2011.

En la misma línea, la reciente creación de la Red de Agentes Informantes del patrimonio cultural de Andalucía (IAPH, 2020) garantiza la continuidad y actualización participativa de este instrumento de conocimiento que aporta al patrimonio cultural de Andalucía más de 1800 expresiones culturales difundidas a través de los más variados medios de difusión, incluyendo las dos principales herramientas fundamentales de difusión y publicación de los trabajos realizados en el Centro de Documentación y Estudios: la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía y el Repositorio de Activos Digitales.

Por otra parte, uno de los objetivos del Atlas es detectar los riesgos y problemáticas que afectan a estas actividades con la intención de poner en marcha posibles planes de salvaguarda que exigen una coordinación entre

los protagonistas de este patrimonio, la ciudadanía y un marco institucional articulado. La evolución lógica de este proyecto, siguiendo la trayectoria desarrollada en el IAPH sobre el patrimonio inmaterial desde la antropología social, ha sido la de profundizar en el diseño colaborativo de planes de salvaguarda.

Con esta intención, el IAPH formuló el proyecto PES PCI: Guía metodológica para el diseño de Planes Especiales de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Deporte, cuyos resultados se muestran en la presente monografía. Conscientes de que la salvaguarda del patrimonio inmaterial depende de una gran variedad de actores sociales y de la coordinación de todos ellos, esta obra colectiva pretende sentar las bases metodológicas con el soporte técnico, conocimientos y agentes necesarios.

Por tanto, me complace presentar esta publicación, cuyo objetivo final es dotar a la administración cultural y a la sociedad de una herramienta versátil y exportable a distintos ámbitos patrimoniales y territoriales que garanticen el necesario acuerdo social e institucional para la salvaguarda de las manifestaciones y expresiones del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo así a la diversidad cultural y al desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo y estable, especialmente en Andalucía.

# Índice

p. 09

## **Introducción**

Puntos de partida y estructura de la propuesta metodológica de los planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial como un acuerdo social

Gema Carrera Díaz

## **SESIÓN 1. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL**

p. 19

### **Capítulo 1**

Medio siglo y una normativa internacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial: entre la diversidad cultural y el “mercado”

Gema Carrera Díaz

p. 52

### **Capítulo 2**

Los planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en Brasil

Rívia Ryker Bandeira de Alencar

p. 75

### **Capítulo 3**

Los Planes Especiales de Salvaguardia y las metodologías participativas para la gestión del patrimonio cultural inmaterial en Colombia

Ana María García López,  
Andrés Forero Rueda

p. 94

### **Capítulo 4**

El inventario del patrimonio cultural inmaterial en Portugal: retrospectiva y retos para su conservación

Teresa Pacheco Albino,  
Ana Saraiva

## **SESIÓN 2. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO EN EL ESTADO ESPAÑOL**

p. 111

### **Capítulo 5**

La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en España. Una visión desde la legislación estatal

Mónica Ortiz Sánchez

p. 132

### **Capítulo 6**

El Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: una metodología compartida

María Pía Timón Tiemblo,  
Sara González Cambeiro

p. 150

### **Capítulo 7**

Aproximación al análisis comparado de las medidas de salvaguardia del PCI en la legislación autonómica española

Luis Pablo Martínez Sanmartín

## **SESIÓN 3. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN ANDALUCÍA**

p. 171

### **Capítulo 8**

Las inscripciones del patrimonio cultural inmaterial en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Alcance y cauces de participación social para su salvaguarda

Fuensanta Plata García

p. 195

### **Capítulo 9**

El inventario como instrumento de salvaguarda. El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. “Un viaje de ida y vuelta”

Gema Carrera Díaz

p. 228

### **Capítulo 10**

El patrimonio cultural inmaterial de Andalucía en las listas de la UNESCO. Una mirada retrospectiva

Cristina Cruces Roldán

p. 249

### **Capítulo 11**

Catálogo de riesgos, medidas y buenas prácticas en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Eva Cote Montes,  
Cristina Isla Palma

## **SESIÓN 4. DISEÑO DE UNA PROPUESTA METODOLÓGICA COLABORATIVA DE PLAN DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL**

p. 280

### **Capítulo 12**

¿Qué debe ser un plan de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial?

Gema Carrera Díaz,  
Fuensanta Plata García

p. 301

### **Capítulo 13**

La salvaguarda del PCI: trenzando acompañamiento etnográfico y procesos participativos

Victoria Quintero-Morón,  
Cristina Sánchez-Carretero

p. 317

### **Capítulo 14**

Todas las voces. La elaboración de mapas de actores para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

David Florido del Corral

p. 336

### **Capítulo 15**

La documentación gráfica, sonora y audiovisual en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Aniceto Delgado Méndez

p. 356

### **Capítulo 16**

Participación y gestión patrimonial en el IAPH: un taller participativo sobre el alcance de un plan especial de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Isabel Durán Salado

p. 368

## **Referencias bibliográficas y fuentes documentales**

p. 414

## **Carta de Andalucía para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial**







## Capítulo 7

# Aproximación al análisis comparado de las medidas de salvaguardia del PCI en la legislación autonómica española

Luis Pablo Martínez Sanmartín,  
Dirección General de Cultura y  
Patrimonio, Generalitat Valenciana<sup>1</sup>

## **1. Introducción: una tímida y desigual recepción de los postulados de la UNESCO**

Las Comunidades Autónomas (CCAA) del Estado español vienen aprobando legislación propia reguladora del patrimonio histórico o cultural (PHC) desde hace tres décadas. Fueron pioneras en la incorporación del patrimonio cultural inmaterial (PCI) a la ordenación del PHC, en pie de igualdad con el patrimonio cultural tangible (PCT), mucho antes de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (LSPCI), de carácter estatal; pero no desarrollaron regímenes específicos de salvaguardia (RES) del PCI acordes a su naturaleza holista, procesual y evolutiva, y al necesario protagonismo de los portadores, como trasluce la bibliografía (López Bravo 2004; Vaquer Caballería 2005; Querol Fernández 2009; Durán Ruiz y Navarro Ortega 2011; Martínez Sanmartín 2011; Alegre Ávila 2012; Labaca Zabala 2013; González Cambeiro 2014, 2015; González Cambeiro y Querol Fernández 2014; Castro López y Ávila Rodríguez 2015; Carrera Díaz 2016; Gabardón de la Banda 2016; Gamero 2016; Ramón Fernández 2016; Velasco Quintana 2016, 2017, 2020; Guerrero Manso 2017; Llop 2018; Marzal Raga 2018; Velasco Maíllo 2019).

La catalana Ley 2/1993, de 5 de marzo, de Fomento y Protección de la Cultura Popular y Tradicional y del Asociacionismo Cultural (LFPCPTAC) evidenció que, con anterioridad a la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003), era posible legislar desde el ámbito autonómico, definiendo regímenes jurídicos complejos para la salvaguardia del PCI sobre la base de la pionera Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular (RSCTP) de la UNESCO de 1989. Todas las leyes autonómicas aprobadas durante las dos décadas siguientes, salvo la derogada Ley 1/2002, de 19 de marzo, de Cultura Popular y Tradicional de las Illes Balears (LCPTIB), eludieron la vía de la LFPCPTAC, proponiendo RES del PCI dispares en alcance, eficacia e intensidad, pero, en general, escasamente desarrollados.

La entrada en vigor de la LSPCI, no exenta de controversia (Carrera Díaz 2015; Castro López y Ávila Rodríguez 2015; Guerrero Manso 2017), ha espolado el avance en la definición de RES del PCI más completos y acordes a la Convención.

## 2. La salvaguardia del PCI en el ordenamiento autonómico

La regulación por las CCAA de regímenes jurídicos específicos para el PCI se ha efectuado mayoritariamente mediante las leyes sectoriales autonómicas de PHC, existiendo dos leyes específicas de cultura popular y tradicional (CPT) y de PCI: la LFPCPTAC catalana y la Ley 18/2019, de 8 de abril, de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Illes Balears (LSPCIIB) de 2019, sucesora de la LCPTIB de 2002. Además, Navarra ha complementado el régimen del PCI de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra (LFPCN) mediante la Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra (LFDCN)<sup>2</sup>.

Considerando su cronología, sus referentes normativos y doctrinales, y el grado de desarrollo de los RES del PCI que proponen, pueden distinguirse tres conjuntos en el corpus de legislación autonómica patrimonial en vigor:

- Una ley pionera específica de CPT con un régimen avanzado para la época, inspirado en la RSCTP de la UNESCO de 1989: la catalana LFPCPTAC (1993).
- Doce leyes sectoriales de PHC aprobadas entre 1998 y 2013, inspiradas en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE) y los postulados de la UNESCO, caracterizadas por RES del PCI apenas esbozados: leyes de las décadas de 1990 (Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón, Extremadura), 2000 (Asturias, Castilla y León, la Rioja, Navarra, Murcia y Andalucía) y 2010 (Castilla-La Mancha, Madrid).
- Cinco leyes recientes, inspiradas en la Convención de 2003, el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PNSPCI) de 2011 y la LSPCI de 2015, que mayoritariamente proponen RES del PCI avanzados: tres leyes sectoriales de PHC, la gallega LPCG (2016), la canaria LPCCN (2019) y la vasca LPCVAS (2019); una ley específica de PCI, la balear LSPCIIB (2019); y una ley de derechos culturales, la navarra LFDCN (2019).

No entran en la clasificación las leyes sectoriales de PHC que, para la salvaguardia, remiten a la legislación especial de CPT/PCI, caso de la catalana LPCCAT (1993) y la balear LPHIB (1998).

<b>Comunidad Autónoma</b>	<b>Denominación de la ley</b>	<b>Siglas</b>
Andalucía	Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía	LPHA
Aragón	Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés	LPCAR
Canarias	Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias	LPCCN
Cantabria	Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria	LPCCT
Castilla-La Mancha	Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha	LPCCLM
Castilla y León	Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León	LPCCLN
Cataluña	Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán Ley 2/1993, de 5 de marzo, de Fomento y Protección de la Cultura Popular y Tradicional y del Asociacionismo Cultural	LPCCAT LFPCPTAC
Comunidad de Madrid	Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid	LPHCM
Comunidad Foral de Navarra	Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra	LFPCN LFDCN
Comunidad Valenciana	Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano	LPCVAL
Extremadura	Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura	LPHCE
Illes Balears	Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears Ley 18/2019, de 8 de abril, de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Illes Balears	LPHIB LSPCIIB
Galicia	Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia	LPCG
La Rioja	Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja	LPCHALR
País Vasco	Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco	LPCVAS
Principado de Asturias	Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural	LPC
Región de Murcia	Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia	LPCCARM

## 2.1. La pionera LFPCPTAC

La Ley 2/1993, de 5 de marzo, de Fomento y Protección de la Cultura Popular y Tradicional y del Asociacionismo Cultural define la CPT como “el conjunto de las manifestaciones de la memoria y la vida colectivas de Cataluña, tanto pasadas como presentes” (artículo 2.1). El concepto de CPT no equivale al de PCI; pero el recurso a la Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular de la UNESCO de 1989 permitió al legislador catalán definir un régimen específico de protección y promoción de la CPT innovador y muy avanzado en el contexto español coetáneo, parcialmente aplicable al PCI.

La LFPCPTAC incorpora medidas aplicables al PCI en sus capítulos I, III y IV, sobre protección y difusión de la CPT, asociaciones culturales y órganos administrativos. La salvaguardia del PCI puede aprovechar el deber de conservación, estudio, promoción y difusión de la CPT por las Administraciones públicas (AAPP) catalanas y los centros de depósito cultural, el derecho de las entidades mantenedoras y difusoras de la CPT a recibir apoyo público, el fomento del asociacionismo cultural relacionado con la CPT, la incorporación de la CPT al currículo educativo formal, su difusión por los medios de comunicación gestionados por las AAPP catalanas, la constitución de entidades promotoras y consultivas, la creación del Inventario del Patrimonio Etnológico de Cataluña y la declaración como Fiestas de Interés Nacional de las celebraciones de la CPT especialmente arraigadas y relevantes.

## 2.2. Doce leyes con RES del PCI apenas esbozados

Las leyes autonómicas sectoriales de PHC que participan del minimalismo regulatorio fían en buena medida la salvaguardia del PCI a su reconocimiento individualizado mediante declaraciones o inscripciones en inventarios, catálogos o registros, y el establecimiento de regímenes de tutela *ad hoc* por los correspondientes decretos declarativos o resoluciones de inscripción. Pero tales actos producen escasos efectos si no se anudan a regímenes jurídicos bien perfilados. Considérese la vaciedad de la figura de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial creada por la LSPCI, analizada por Mónica Ortiz Sánchez en el capítulo 5 de este volumen.



Los artefactos y los inmuebles sin sus formas de vida históricamente asociadas no forman parte del PCI. Antigua fábrica de carros en Beneixama, 2021 (Luis Pablo Martínez)

Los RES del PCI minimalistas establecidos por las leyes autonómicas de este grupo se ven complementados, en algunos casos, por la previsión legal de la aplicación a la salvaguardia del PCI de medidas de tutela específicas del PCT; y en todos los casos, por la aplicabilidad de algunas de las medidas genéricas de protección y fomento del PHC.

Cinco leyes continúan prescribiendo como únicas medidas específicas de salvaguardia del PCI su documentación y estudio (D+E), siguiendo el artículo 47.3 de la LPHE. Son la valenciana LPCVAL (1998), la aragonesa LPCAR (1999), la extremeña LPHCE (1999), la castellano-leonesa LPCCLN (2002) y la castellano-manchega LPCCLM (2013). La exigencia de la definición del ámbito espacial y temporal en las declaraciones de elementos del PCI como bien de interés cultural (BIC) por el artículo 28.4 de la LPCVAL abrió la puerta a planteamientos más avanzados.



Las restantes siete leyes mantienen la D+E como protocolo universal de tratamiento del PCI, pero exploran otras técnicas, sin llegar a definir sistemas complejos y bien articulados, acordes al carácter holista, procesual, evolutivo y “de abajo arriba” requerido por la salvaguardia del PCI, como establece desde 2011 el PNSPCI. Son la cántabra LPCCT (1998), la asturiana LPC (2001), la riojana LPCHALR (2004), la navarra LFPCN (2005), la murciana LPCCARM (2007), la andaluza LPHA (2007) y la madrileña LPHCM (2013).

Más allá de la D+E, estas leyes apuestan mayoritariamente por medidas como la creación de inventarios de PCI gestionados por la Administración, el apoyo público al asociacionismo y a los centros de investigación y de depósito cultural, o la preferencia del PCI protegido en las acciones públicas de salvaguardia. Algunas proponen la protección del PCI mediante la tutela del

La gastronomía como arte de lo efímero. Cocina del Restaurante Cachito, Camp d'Elx, Elche, 2019  
(Luis Pablo Martínez)



PCT y a través de otras leyes sectoriales, e incluso su revitalización, aunque no concreten vías para su consecución.

Paradójicamente, la norma más reciente es la más pobre en sus propuestas. La madrileña LPHCM de 2013 únicamente añade a la D+E la previsión de la elaboración de un “inventario sistemático” (artículo 33.2).

En franco contraste, la veterana LPCCT cántabra de 1998 propone un registro, un inventario y un catálogo del patrimonio etnográfico de Cantabria, la coordinación de los planeamientos concurrentes (señalando los de orden urbanístico y medioambiental), el impulso por los poderes públicos regionales de un programa de actuaciones etnográficas ordinarias y urgentes, y la promoción de festivales y fiestas populares (artículo 98.1, 2, 8, 9).

La LPC asturiana de 2001 prevé la salvaguardia del PCI por las legislaciones sectoriales concurrentes, como urbanismo, ordenación del territorio, medioambiente, espacios naturales protegidos y desarrollo rural (artículos 70, 71.a); apoya la transmisión a los jóvenes de “conocimientos y técnicas artesanales” con valor económico potencial (artículo 71.b); prevé la dignificación de la CPT mediante su “mantenimiento respetuoso” y su incorporación al sistema educativo (artículo 71.c); promueve la protección de la diversidad de las expresiones de la CPT (artículo 71.d); fomenta la investigación y el conocimiento de la lengua asturiana y del gallegoasturiano (artículo 71.e); y contempla el apoyo a personas y entidades mantenedoras y revitalizadoras del PCI, y el fomento de museos y centros de investigación sobre CPT (artículos 72, 73).

La riojana LPCHALR de 2004 ordena la promoción divulgativa del PCI en el ámbito educativo, el apoyo de los poderes públicos a las personas jurídicas y físicas relacionadas con el mantenimiento, la revitalización y la difusión del patrimonio etnográfico riojano, la colaboración entre AAPP y sector privado para la creación de centros de investigación y museos etnográficos, y el impulso de un Atlas Etnográfico (artículo 64.4, 5, 6).

La navarra LFPCN de 2005, que prevé la elaboración y actualización del Inventario Etnológico de Navarra (artículo 68), añade la preferencia del PCI inscrito en el Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra para “su



conocimiento, protección, difusión y obtención de subvenciones y ayudas oficiales” (artículo 69.2).

La murciana LPCCARM de 2007 ordena el impulso por la Administración autonómica de medidas de “valorización” y “revitalización” del PCI “en previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro” (artículo 66). Como singularidad, tipifica como sanción leve “el incumplimiento de las medidas acordadas en virtud del artículo 66 para la protección de los bienes inmateriales de valor etnográfico” (artículo 73.g), y como infracción grave “la separación no autorizada de bienes muebles vinculados a bienes inmuebles o inmateriales declarados de interés cultural” (artículo 74.f).

La andaluza LPHA de 2007 propone la preferencia del PCI inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) para su conocimiento, protección, difusión y acceso a ayudas públicas, así como la difusión del PCI “en peligro de desaparición” (artículo 63); y prevé la protección de los bienes muebles y del ámbito territorial vinculados a las actividades de interés etnológico del CGPHA, sometiendo a autorización las intervenciones sobre el territorio vinculado (artículo 61.2, 3).

Pero el juicio sobre la idoneidad de las medidas de salvaguardia del PCI propuestas por las leyes autonómicas de PHC debe trascender el análisis de los RES. Muchas complementan su minimalismo mediante disposiciones del régimen específico de tutela del PCT, preceptos del régimen de general aplicación al PHC y figuras declarativas y requisitos para las declaraciones de PCT que abren la puerta a la protección de las dimensiones tangible y temporal propias de cada manifestación del PCI.

La mayor parte de las leyes analizadas establecen figuras de reconocimiento del PCT inmueble que facilitan la protección del PCI asociado, como las de paisaje cultural, espacio, lugar o conjunto etnológico/etnográfico, o sitio histórico. Dos normas introducen preceptos que exigen la protección del PCI mediante la protección del patrimonio inmueble.

La LPCVAL incluye medidas aplicables a la salvaguardia del PCI en la regulación del PCT. Así, exige la identificación del PCI asociado en las declaraciones de BIC inmuebles (artículo 28.2.d), y prescribe, en la regulación de los



El PCI contribuye a la sostenibilidad ambiental. La cultura tradicional del regadío por acequias no malgasta el agua. Riego de un campo acaballonado en Callosa de Segura, Vega Baja del Segura, 2016 (Luis Pablo Martínez)

planes especiales de protección de BIC inmuebles y de sus entornos, que el planeamiento urbanístico incentive la recuperación de las “actividades económicas tradicionales”, el mantenimiento de las “prácticas rituales o simbólicas tradicionales” en la asignación de usos y la ocupación de espacios o viales, y “la adopción de medidas para el mantenimiento de las tradiciones y las actividades culturales propias, evitando la pérdida de usos y costumbres que son parte de nuestro patrimonio inmaterial” en la conservación de los BIC inmuebles (artículo 39.2.e, k, q).

La LPHA incorpora requisitos y medidas en la regulación del PCT que inciden favorablemente en la salvaguardia del PCI, como la previsión de la incorporación al Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz y



El estudio y la difusión como factores coadyuvantes a la transmisión del PCI. Taller sobre la cultura del cáñamo de Callosa de Segura impartido en las III Jornadas de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de la Comunitat Valenciana, Aras de los Olmos, 2018 (Luis Pablo Martínez)

a los catálogos urbanísticos de “los bienes inmuebles y los espacios vinculados a actividades de interés etnológico” (artículo 13.2), la adscripción con la condición jurídica de BIC de los bienes muebles y las actividades de interés etnológico vinculados en toda inscripción de BIC inmueble en el CGPHA (artículo 27.2), y la exigencia de la incorporación al planeamiento urbanístico con afección a ciertas clases de BIC inmuebles de “determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales” (artículo 31.1.e).

Asimismo, aunque los regímenes generales de protección y fomento del PHC de las leyes de este grupo proponen mayoritariamente medidas de tutela del PCT (muchas inadecuadas o de imposible aplicación al PCI), la salvaguardia del PCI puede beneficiarse de algunas de ellas. Es el caso del acceso a ayudas públicas, la incorporación al sistema educativo, el apoyo a las personas

físicas y jurídicas comprometidas con la preservación del patrimonio o la suspensión cautelar de intervenciones potencialmente lesivas.

Incluso las leyes autonómicas con RES del PCI menos desarrollados permiten, pues, desarrollar políticas de salvaguardia con cierta eficacia.

### **2.3. Tras la estela de la LSPCI: las leyes autonómicas de última generación**

La LSPCI de 2015 ha dinamizado el panorama legislativo autonómico. Las leyes más recientes han incorporado con mayor decisión preceptos inspirados en la Convención de 2003 y el PNSPCI de 2011, desigualmente pasados por el tamiz de la ley estatal. Ejemplo de disparidad, únicamente la canaria LPCCN y la balear LSPCIIB incluyen una relación legal de principios rectores de las acciones de salvaguardia del PCI siguiendo la LSPCI.

La navarra LFDCN (2019) regula el PCI desde el derecho constitucional a la cultura, incorporando como principio inspirador “la protección, conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial de Navarra” (artículo 2.c). La ley incluye en la relación de derechos culturales el disfrute y acceso libre y equitativo al PCI, la colaboración con las comunidades en su salvaguardia, y el conocimiento de las CPT (artículo 4.2.g, h); reconoce el derecho al conocimiento y acceso al PCI, independientemente de la finalidad, introduciendo con carácter pionero la previsión de la armonización de su ejercicio “con los Principios Éticos para la Salvaguardia del PCI elaborados por la UNESCO”, y estableciendo el deber de la Administración foral de apoyar a entidades locales, asociaciones y portadores, de facilitar el desarrollo de la CPT con protagonismo de creadores y mantenedores, y de promover mediante ayudas públicas las iniciativas locales de valorización (artículo 11). La ley también establece la especial obligación municipal de velar por la salvaguardia del PCI (artículo 34.1).

Las cuatro leyes propiamente patrimoniales de este grupo incorporan en general los mecanismos de tutela del PCI explorados por las leyes anteriores. En cuanto a sus propuestas de regulación específica de la salvaguardia del PCI, y de menor a mayor intensidad, sorprende el comedimiento de la canaria





Los oficios preindustriales precisan de un plus de apoyo público para su revitalización y transmisión.  
Taller del alfarero de Emili Boix, Agost, 2018 (Luis Pablo Martínez)

LPCCN (2019), que limita sus aportaciones al deber de las AAPP de promover y difundir el PCI, y al reconocimiento y uso de la modalidad lingüística canaria por los medios audiovisuales públicos (artículo 108.3, 4).

La vasca LPCVAS (2019) apuesta por la protección integral del PCI y del PCT vinculado (artículo 57.1), la elaboración y revisión periódica del Inventario de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Bienes Culturales Inmateriales (artículo 58), y la creación de órganos de gestión específicos (OGE) para cada una de las once categorías de PCI reconocidas, participados por Gobierno Vasco, diputaciones forales, Asociación de Municipios Vascos, comunidades portadoras y organizaciones reconocidas; atribuyendo a los OGE la identificación de las prioridades y la elaboración, fomento y evaluación de planes de salvaguarda (PS) de bienes culturales inmateriales (artículo 59).

La LPCG gallega (2016) plantea la protección del PCT vinculado al PCI (artículo 72); la integración del PCI en los procesos de planificación, especialmente en los educativos y de sensibilización; el impulso de metodologías específicas pluridisciplinares de investigación; la creación y el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del PCI, la garantía del acceso al PCI, sin perjuicio de los usos consuetudinarios, y la información al público acerca de amenazas y acciones de salvaguardia; el reconocimiento de artistas, comunidades culturales y organizaciones creativas (artículo 69.1, 2, 3, 5); el reconocimiento de “maestros y maestras”, “comunidades” y “organizaciones” mantenedoras y transmisoras del PCI; la exigencia de incorporación previa y expresa a todo expediente de protección de la petición de “las comunidades y organizaciones representativas del bien”; el reconocimiento por los instrumentos de protección del carácter vivo y dinámico del PCI, indicando las condiciones y el marco temporal y espacial de la manifestación (artículo 70.2, 4, 5, 6); el reconocimiento/creación de órganos de gestión específicos (OGE) representativos de las “comunidades y organizaciones reconocidas” para cada PCI declarado BIC, con posible colaboración de la Administración autonómica; la encomienda a los OGE de funciones de transmisión de actividades y manifestaciones entre comunidades y organizaciones, monitorización del PCI, comunicación de amenazas, propuesta de medidas de salvaguardia y reconocimiento de maestros y maestras, comunidades u organizaciones; y el diálogo con los OGE y portadores previamente a la ejecución de medidas por las AAPP (artículo 71).

La balear LSPCIIB (2019) despliega el repertorio más amplio de medidas específicas de salvaguardia del PCI. Es la única entre las leyes españolas sectoriales de PHC y especiales de PCI que incorpora el deber de las AAPP de impedir el uso inapropiado del PCI y su apropiación indebida por personas sin legitimación mediante la propiedad intelectual o industrial (artículo 10). Establece el deber de inventario del PCI por Consejos Insulares (CI) y municipios, el de impulso de programas de investigación para el Gobierno autonómico y los CI (artículo 9), y un régimen específico del PCI declarado BIC, que incorpora la obligación de promoción de políticas públicas de salvaguardia; la creación/reconocimiento de órganos de gestión específicos (OGE) representativos de comunidades, grupos y personas portadoras; el deber de la Administración insular de velar por los valores justificativos de la declaración mediante recomendaciones a portadores/promotores, creación/

refuerzo de instituciones de documentación, investigación y gestión del PCI, fomento de estudios científicos, técnicos y artísticos y de metodologías de salvaguardia, apoyo económico, garantía de acceso con respeto de usos consuetudinarios, divulgación, visibilidad, promoción y estudio, conservación del soporte material mueble e inmueble, e información a los portadores sobre PCI en peligro y acciones recomendadas; la obligación de la Administración insular de implementar medidas de “seguimiento y actualización”, y el deber de difusión y promoción por las AAPP baleares (artículo 19.1, 3, 4, 5, 6).

La LSPCIIB también establece la garantía de conocimiento, acceso y difusión social del PCI por la Administración, y el deber de portadores, promotores y gestores de permitir la investigación científica y el acceso público, con respeto a los usos consuetudinarios (artículo 20); el sometimiento del planeamiento urbanístico al régimen inherente a las declaraciones de BIC inmateriales (artículo 21); y la protección del PCT vinculado al PCI declarado BIC, pudiendo aplicarse a tal fin la normativa urbanística y de ordenación del territorio (artículo 22). La norma prevé la creación de un Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Illes Balears (artículo 29) y de órganos colegiados consultivos a escala insular (artículo 32); determina la relación de instituciones consultivas (artículo 33); e incorpora el reconocimiento y fomento de asociaciones y fundaciones de interés cultural relacionadas con la CPT (artículos 34, 35), siguiendo la Ley 1/2002, de 19 de marzo, de Cultura Popular y Tradicional de las Illes Balears (LCPTIB). Mediante sus dos disposiciones adicionales, la LSPCIIB obliga a los CI a elaborar/actualizar sus inventarios de PCI, con colaboración de la Administración autonómica, y otorga la condición de BIC inmaterial a las Fiestas de Interés Cultural declaradas en aplicación de la LCPTIB.

La LSPCIIB incorpora un capítulo sobre actuaciones y medidas de protección, promoción y fomento del PCI, que contempla su integración en el currículo educativo con participación activa del alumnado (artículo 23); el deber de respeto de la normativa de igualdad entre hombres y mujeres, mediante la incentivación de la producción artística/cultural, la visibilización de la contribución histórica de la mujer, la promoción y garantía de la igualdad de oportunidades en fiestas tradicionales y cultura popular, y la corrección de estereotipos sexistas (artículo 25); la obligación de la Administración autonómica, de acuerdo con los CI, de promover la proyección exterior, el fomento de intercambios, el conocimiento recíproco interinsular del PCI y la comple-



Las leyes deben promover las buenas prácticas. Sillas de propiedad municipal a disposición de la ciudadanía en el paseo de la Explanada de Alicante, 2018 (Luis Pablo Martínez)

mentación de iniciativas de terceros (artículo 26); y ayudas económicas para inventario e investigación aplicada, promoción de la difusión del PCI mediante trabajo en red, y trabajo “en el reconocimiento y la patrimonialización de las expresiones y las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, con el fin de restituirlo a sus portadores” (artículo 27).

Pero el PCI no se restituye a los portadores mediante su reconocimiento oficial; contrariamente, una patrimonialización jurídico-administrativa mal concebida puede facilitar la expropiación de los portadores (Carrera Díaz 2017). La ley balear incurre en ciertos excesos regulativos. La ley empodera a los portadores, a la par que los somete a intensa tutela administrativa, repercutiendo sobre ellos una importante carga burocrática y económica. Así, requiere la incorporación a todo expediente de declaración del “testimonio



del consentimiento previo, libre e informado, de las comunidades, los grupos o las personas portadores del bien cultural inmaterial” (artículo 15.5.h), pero, simultáneamente, obliga a los portadores a efectuar “el seguimiento y la revisión” del bien y a informar al CI correspondiente; añadiendo que la no remisión del informe quinquenal de seguimiento y revisión del estado del bien puede justificar su elaboración subsidiaria por la Administración, con repercusión de los costes sobre los portadores (artículo 15.10). Igualmente, la ley requiere planes de salvaguarda (PS) como instrumentos de gestión del PCI declarado BIC, encomendando su elaboración, ejecución y actualización a portadores, promotores y gestores del PCI, obligándoles a comunicar modificaciones significativas y a remitir informes quinquenales de resultados a la Administración insular (artículo 24).

### **3. Conclusión: elementos para la reflexión y vías a explorar**

Las vacilaciones y excesos detectados se explican parcialmente por la novedad de la materia; pero también reflejan las dificultades de encaje de la tradición jurídica europea de tutela del PCT con la regulación del PCI propuesta por la UNESCO. Las aparentes divergencias deben ser relativizadas en aras de la unidad epistemológica y metodológica. Propuestas de la Convención de 2003 como la concepción holista del PCI, la reserva a los portadores de la capacidad de determinación de la patrimonialidad del PCI o la concepción procesual de la salvaguardia del PCI son fruto de la evolución de la noción de PHC desde hace un siglo, caracterizada por su constante ampliación y democratización. La definición de regímenes específicos de salvaguardia (RES) del PCI eficaces requiere integrar y conciliar ambas aproximaciones, y aprender de los errores, mediante:

1. Definiciones legales integrales y holistas de PHC basadas en el análisis de valores culturales, fundamento de la protección del patrimonio en Europa desde hace más de un siglo (Castillo Ruiz 2004), sin perjuicio de su acompañamiento por definiciones de PCI y relaciones de sus ámbitos de expresión inspiradas en la Convención de 2003, como hacen muchas de las leyes analizadas. La incorporación de principios



El PCI expresa la identidad de las personas, los grupos y las comunidades que lo recrean y transmiten. La Muixeranga de Algemés visita Elche, 2019 (Luis Pablo Martínez)



La salvaguardia del PCI debe garantizar el respeto a las diferentes miradas que lo valoran. Colina de las Cruces, Siauliai, Lituania, 2019 (Luis Pablo Martínez)

rectores de la salvaguardia siguiendo la LSPCI resulta igualmente recomendable.

2. Integración ponderada en la regulación de la salvaguardia del papel de la Administración, la ciudadanía y los portadores, atribuyendo a estos un plus de derechos, limitado por la legalidad y el interés público; y graduando sus obligaciones según las características de los diferentes ámbitos del PCI y de cada elemento del PCI en particular. Los colectivos y las personas portadoras que a duras penas mantienen su propia existencia no deben ser penalizados con cargas burocráticas por el reconocimiento oficial de su PCI. Más mediación, menos obligación.

3. Garantía de un plus de apoyo al PCI que verdaderamente requiere soporte externo para su supervivencia, caso de los oficios y las formas de sociabilidad preindustriales supervivientes en nuestra sociedad globalizada e hiperindustrializada (Martínez Sanmartín 2005; Cuesta Ávila 2016; Llop 2018); establecimiento de mecanismos correctores en su favor, frente a las manifestaciones del PCI que, como las fiestas, no corren, en general, peligro de extinción.
4. Reflejo del carácter sistémico y procesual del vínculo de las dimensiones mueble, inmueble e inmaterial en la sistemática de las leyes de PHC. Se debe garantizar la máxima aplicabilidad a los bienes muebles, inmuebles e inmateriales de los preceptos de general aplicación al PHC. La salvaguardia específica del PCT debe prever la del PCI asociado, y viceversa, como proponen desde hace décadas varias de las leyes autonómicas en vigor. La legislación sectorial de PHC debe prestar especial atención a los procesos que interrelacionan sus tres dimensiones, como hacen las leyes de patrimonio natural y medioambiente con relación a los procesos ecológicos esenciales (Tolón Becerra y Lastra Bravo 2008); recordando la atención que la ficha modelo de inventario del PCI auspiciada por el PNSPCI presta a los procesos. El holismo y el procesualismo sistémico del PCI como parte del PHC también exige, como proponen varias leyes autonómicas, la previsión expresa de su respeto y fomento por las restantes legislaciones sectoriales concurrentes. Posible aplicación del principio de excepción cultural a la salvaguardia del PCI.
5. Consideración de la ontología del PCI, que incorpora productos objetivados de la agencia humana en soporte material, con mayor o menor capacidad de permanencia independientemente de la acción de mantenimiento (bienes muebles e inmuebles), junto a productos evanescentes, expresiones del comportamiento humano y conocimientos orientados a la praxis, que no pueden existir disociados de las personas y sus comunidades: los elementos puramente inmateriales que lo adjetivan. La salvaguardia del componente intangible del PCI requiere fundamentalmente medidas indirectas, orientadas a:



El análisis de valores facilita la identificación de los atributos muebles, inmuebles e inmateriales del PCI y de los procesos que los interrelacionan. La Festa o Misteri d'Elx, 2019 (Luis Pablo Martínez)

La incentivación del mantenimiento, recreación y transmisión de los conocimientos y los comportamientos que expresan el PCI mediante acciones dirigidas a las personas, los grupos y las comunidades portadoras (reconocimiento social, apoyo laboral, vinculación al sistema educativo, ayudas económicas, distinciones de calidad, promoción del asociacionismo, desgravaciones y exenciones fiscales, promoción de las buenas prácticas...) y a la comunidad más amplia que alberga el PCI (sensibilización a través de la educación formal, no formal e informal, promoción del acceso público...).

El mantenimiento de las condiciones materiales y ambientales que hacen posible la expresión del PCI: acciones dirigidas al soporte material mueble e inmueble del PCI, y a su entorno, tangible e intangible (piénsese en la incidencia disruptiva de la contaminación acústica sobre las artes del espectáculo y los rituales).

6. El reconocimiento de las limitaciones y los riesgos de las medidas de aplicación directa al PCI, como la D+E o la propiedad intelectual. La dimensión intangible del PCI puede objetivarse como información acerca del PCI en soporte material (descripciones escritas, registro audiovisual). Dicha información, y los estudios que a partir de ella y de la observación directa del PCI se efectúen, pueden coadyuvar a la transmisión del PCI, fomentando la capacitación, la sensibilización pública y la autoconciencia de los portadores: pero no la garantizan, aunque lo proclamen la mayoría de las leyes analizadas. La fórmula “documentación y estudio” no es la panacea para el PCI: es un placebo que conlleva riesgos. Grabaciones y textos tienen efectos sobre el PCI, como el establecimiento de cánones, o la facilitación de la apropiación económica a través de la propiedad intelectual. Los RES del PCI deben exigir y promover el conocimiento previo e informado de los portadores sobre las repercusiones potenciales de la declaración patrimonial de su manifestación intangible, y abordar la propiedad intelectual, en línea con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ignorarla no resolverá la amenaza que supone. Su utilización en defensa de los derechos colectivos de los portadores es posible, como demuestra una ley autonómica patrimonial singular, la valenciana Ley 13/2005, de 22 de diciembre, del Misteri d’Elx (Martínez Sanmartín 2020).

## Notas

1. Las opiniones del autor no representan a la institución en la que trabaja.

2. Se recurre a las versiones consolidadas reunidas por el Ministerio de Cultura y Deporte y el BOE (2021). Deben usarse con cautela. Así, la versión consolidada de la LPCVAL mantiene “los festejos

taurinos tradicionales” como parte de PCI valenciano, cuando tal consideración cesó con la entrada en vigor de la Ley 1/2016, de 26 de enero, de derogación de la Ley 6/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano.